



El sector privado reclama beneficios fiscales para invertir en la movilidad española

“La red de infraestructuras españolas necesita recibir inversiones de unos 130.000 millones de euros en áreas como la movilidad urbana, las infraestructuras de transporte interurbano, la logística o el medioambiente”, ha subrayado el presidente de la patronal española de grandes constructoras (Seopan), Julián Núñez, durante su intervención en una jornada sobre infraestructuras organizada por el diario Expansión. La mesa de debate, en la que han participado actores del sector de las infraestructuras, ha alertado de la necesidad de atraer capital propio y extranjero para las obras y actuaciones pendientes en la movilidad y la red de transporte española.

Las jornadas dedicadas a la creación de un Pacto de Estado por las Infraestructuras han reflejado la necesidad de incentivar a los inversores. “Es absurdo que invirtamos nuestro know how en el extranjero y que en nuestro país

el capital privado se retraiga”, ha afirmado el socio responsable del sector Construcción y Servicios, PwC, Antonio Sánchez Recio. Para ello, el tejido empresarial ha propuesto incentivar las inversiones a través de beneficios fiscales que mejoren el atractivo del mercado español. Es fundamental la creación de un pacto de Estado para las infraestructuras “que regule temas básicos como el tributario que canalicen los fondos a proyectos en España”, ha añadido. El pago por uso es una de las soluciones que se han propuesto, colaboraciones público-privadas o incluso sustituir el pago de impuestos por el de infraestructuras, como ya ha empezado a aplicarse en algunos países latinoamericanos.

Por ejemplo, la cifra que representa la logística en España ronda los 1.500 millones de euros “en su escenario más bajo”, ha puntualizado Núñez. Además, se incluyen en la cifra la mejora de las conexiones ferroviarias a la red de puertos de interés general (700 millones de euros de inversión). Además, estas son las que tienen mayor rentabilidad social, puesto que “las infraestructuras no son un gasto, sino una inversión”, ha apuntado la directora del área de Broseta, Rosa Vidal.

Por su parte, el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, también ha reiterado que un Pacto de Estado es “esencial”. Unos 34.000 millones de euros es la cifra necesaria para ejecutar las actuaciones de obra nueva en carreteras del Estado pendientes, “sin contar los gastos de mantenimiento y conservación de la red que crece cada año”, ha recordado el ministro en funciones. Según los datos de Fomento, en lo relativo al ferrocarril se suman unos 12.000 millones de euros pendientes en Adif, y otros 21.000 millones en Adif Alta Velocidad. Frente a ello, en los últimos años, el presupuesto para crear nuevas carreteras está en torno a los 1.000 millones de euros anuales, y el presupuesto de Adif es del orden de los 2.000 millones anuales. Es por ello que Ábalos ha considerado que “no es sencillo de encajar estas cantidades en los presupuestos”.

Este pacto, según ha recogido el ministro, debe basarse en principios y no sobre actuaciones concretas. Estas líneas maestras deben ser consensuadas y basarse

en los valores de la sociedad actual: la fiscalidad, el medioambiente, la digitalización, la intermodalidad, entre otros. “Este pacto debe ir más allá de los ciclos electorales”, ha puntualizado José Luis Ábalos. Los motivos citados por el ministro son, por un lado, porque las infraestructuras de transporte son el principal destino de la inversión pública del Estado. Por otro, la digitalización y la tecnología dificulta la utilidad actual de ciertas infraestructuras y, por tanto, es necesario “invertir más en movilidad y logística” para transformarlas.

Al igual que ya sucede en otros países europeos como Francia o Alemania, este pacto debería desembocar en una ley de Movilidad que aglutine de forma transversal todos los aspectos en la materia, ha defendido el ministro, desde medidas para atender a las necesidades de la sociedad, hasta la fiscalidad y la colaboración entre las administraciones. “Debemos ofrecer soluciones inteligentes basadas en tecnología y no en hormigón”, ha subrayado Ábalos.

Fomento ha detallado que su departamento se encuentra trabajando con otros ministerios en una Estrategia de Movilidad Segura y Conectada. El objetivo es, entre otros, colocar a España “entre los más avanzados” en la materia. Para el diseño de esta estrategia y el consiguiente pacto, el ministro en funciones ha informado que está contando con la colaboración de informes y estudios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la OCDE, la Comisión Europea y otros agentes del sector.